

Públicas, Transportes y Medio Ambiente, desestimatoria del recurso de reposición deducido contra la anterior resolución de 8 de septiembre de 1993 relativa a sanción e indemnización por vertidos indirectos, sin la debida autorización, al río Cigüela, en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en fecha 6 de junio de 1997, ha sido dictada sentencia, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de "Lácteas García Baquero, Sociedad Anónima", contra las resoluciones reseñadas en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, debemos declarar y declaramos que son las mismas contrarias a Derecho, anulándolas; no se hace imposición de costas.»

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado», del 27), el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

762

ORDEN de 9 de diciembre de 1998 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 3 de febrero de 1993, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 694/1991, interpuesto por don José María Aristrain de la Cruz, así como cumplimiento del auto del Tribunal Supremo, de 8 de marzo de 1995, recaído en el recurso de casación 3.170/1993.

En el recurso contencioso-administrativo número 694/1991, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la representación procesal de don José María Aristrain de la Cruz contra la desestimación por silencio administrativo de la petición formulada ante el anterior Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, sobre indemnización relativa a la compensación de las rentas no percibidas de los aprovechamientos energéticos en la finca «Las Nuevas», sita en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), en fecha 3 de febrero de 1993, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo formulado por el Procurador don José Ramón Rego Rodríguez, en nombre y representación de don José María Aristrain de la Cruz, contra la denegación por silencio administrativo de la petición de fecha 9 de mayo de 1988 formulada ante la Dirección General del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, denunciado en mora el 22 de marzo de 1989, debemos declarar y declaramos que dicho acto es nulo por no estar ajustado a derecho, debiendo, en consecuencia, proceder a la incoación de la pieza separada prevista en el artículo 26 de la Ley de Expropiación Forzosa. Sin hacer mención especial en cuanto a las costas.»

Asimismo, y en el recurso de casación número 3.170/1993, preparado ante el Tribunal Supremo por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, contra la anterior sentencia, en fecha 8 de marzo de 1995 se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«La Sala acuerda: Declarar desierto el recurso de casación preparado por la Administración del Estado contra resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) en los autos número 694/1991; sin hacer expresa imposición de costas.»

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumplan en sus propios términos los referidos sentencia y auto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Conservación de la Naturaleza.

763

ORDEN de 9 de diciembre de 1998 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de mayo de 1991 en el recurso contencioso-administrativo número 28.286, interpuesto por don Marcos López Alarcón, así como cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de mayo de 1997, recaída en el recurso de apelación número 11.361/1991, interpuesto por el recurrente contra la anterior sentencia.

En el recurso contencioso-administrativo número 28.286, interpuesto ante la Audiencia Nacional por la representación procesal de don Marcos López Alarcón contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 19 de febrero de 1987, que confirmó el canon fijado por la antigua Dirección General de Puertos y Costas, de 23 de junio de 1982, sobre terrenos de dominio público en virtud de concesión administrativa en la playa de la Raya, de Mazarrón (Murcia), en fecha 22 de mayo de 1991, fue dictada sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallo: Desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Marcos López Alarcón contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 19 de febrero de 1987, que desestimó la reclamación económico-administrativa contra la resolución de la Dirección General de Puertos y Costas, de 23 de junio de 1982, que determinó el canon de ocupación del terreno de dominio público sito en la playa de la Raya, de Mazarrón, en 80 pesetas metro cuadrado y año, confirmando dichas resoluciones al estar dictadas de conformidad con el ordenamiento jurídico; absolviendo a la Administración demandada de las pretensiones contra ella formuladas en la demanda; sin condena en las costas causadas en este proceso.»

Asimismo, y en el recurso de apelación número 11.361/1991, interpuesto ante el Tribunal Supremo por la representación de don Marcos López Alarcón contra la anterior sentencia, en fecha 7 de mayo de 1997, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos la apelación interpuesta por la representación procesal de don Marcos López Alarcón contra la sentencia dictada, en fecha 22 de mayo de 1991, por la Sala de esta jurisdicción de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 28.286/1986, que confirmamos, sin costas.»

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos las referidas sentencias.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Costas.

764

ORDEN de 9 de diciembre de 1998 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de febrero de 1998 recaída en el recurso contencioso-administrativo número 1.378/1995 interpuesto por «OCP Construcciones, Sociedad Anónima».

En el recurso contencioso-administrativo número 1.378/1995, interpuesto ante la Audiencia Nacional, por la representación procesal de la entidad mercantil «OCP Construcciones, Sociedad Anónima», contra la desestimación a virtud de silencio del abono de intereses por demora en el pago de liquidación provisional de las obras del paseo marítimo en la ría del Burgo-Cambre (A Coruña), en fecha 7 de febrero de 1998, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso administrativo número 1/1378/1995, interpuesto por «OCP Construcciones, Sociedad Anónima», representado por el Procurador de los Tribunales don Nicolás Muñoz Rivas, y asistido del letrado don Ricardo Echevarría de Rada, contra la desestimación a virtud de silencio del abono de intereses por demora por retraso en el pago de la liquidación provisional de las obras del paseo marítimo en la ría de Burgo (Cambre), y que asciende a la cantidad de 1.358.323 pesetas, al abono de cuya cantidad condenamos

a la Administración, con su correspondiente IVA, y al pago de los intereses de dicha cantidad desde la interposición del recurso jurisdiccional hasta la notificación de esta sentencia; sin condena en costas.»

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Costas.

765

ORDEN de 9 de diciembre de 1998 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de enero de 1998 recaída en el recurso contencioso-administrativo número 450/1995, interpuesto por «Alcoholes y Vinos, Sociedad Anónima» (ALVISA).

En el recurso contencioso-administrativo número 450/1995, interpuesto ante la Audiencia Nacional, por la representación procesal de la entidad mercantil «Alcoholes y Vinos, Sociedad Anónima», contra la Orden del 1 de diciembre de 1994 del anterior Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución de 14 de febrero de 1994, relativa a sanción e indemnización por daños causados al dominio público hidráulico por vertidos de aguas residuales al río Córcoles Araves en el término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real), en fecha 23 de enero de 1998, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que con estimación del recurso interpuesto por el Procurador don Juan A. García San Miguel en representación de «Alcoholes y Vinos, Sociedad Anónima» (ALVISA), debemos anular y anulamos por contrario a derecho el acto recurrido, sin costas.»

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado», el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

766

ORDEN de 9 de diciembre de 1998 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 1 de marzo de 1990, en el recurso contencioso-administrativo número 1.103/1988, interpuesto por doña Dolores Zaragoza Higón, así como cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 1998, recaída en el recurso de apelación 4.539/1990, interpuesto por la recurrente contra la anterior sentencia.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.103/1988, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la representación procesal de doña Dolores Zaragoza Higón, contra desestimación tácita del recurso de alzada formulado contra la Resolución del antiguo Servicio de Costas y Señales marítimas de Castellón, de fecha 23 de mayo de 1988, relativa a recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre, en el término municipal de Almenara (Castellón), en fecha 1 de marzo de 1990, ha sido dictada sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Dolores Zaragoza Higón contra la Resolución del Ingeniero Jefe del Servicio de Costas y Señales Marítimas de Castellón de 23 de mayo de 1988, recaída en el expediente C-1328, y contra la presunta deses-

timación del recurso de alzada deducido contra la misma; sin hacer expresa imposición de costas.»

Asimismo, y en recurso de apelación número 4.539/1990, interpuesto ante el Tribunal Supremo, por la representación de doña Dolores Zaragoza Higón, contra la anterior sentencia, en fecha 19 de marzo de 1998, ha sido dictada sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto, por la representación procesal de doña Dolores Zaragoza Higón, contra la sentencia número 178 de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de fecha 1 de marzo de 1990, recaída en el recurso número 1.103/1988, y confirmamos en su totalidad dicha sentencia, sin hacer una expresa imposición en costas.»

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en sus propios términos, las referidas sentencias.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Costas.

767

ORDEN de 9 de diciembre de 1998 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 22 de noviembre de 1996, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 546/1994, interpuesto por don Fernando Ríos Martínez y otros.

En el recurso contencioso-administrativo número 546/1994, interpuesto ante la Audiencia Nacional por la representación procesal de don Fernando Ríos Martínez, doña María Luisa, doña María Ángeles Elena y don Fernando José Alberto Ríos Gómez, contra la resolución del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de fecha 8 de abril de 1994, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 25 de enero de 1993, por la que se aprueba el deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa comprendido en la ría de Eo, entre los puentes de la CN-634 sobre los ríos Suarón y Monjardín, de Vegadeo (Asturias), ha sido dictada sentencia en fecha 22 de noviembre de 1996, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de don Fernando Ríos Martínez, doña María Luisa, doña María Ángeles Elena y don Fernando José Alberto Ríos Gómez, contra las resoluciones reseñadas en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, debemos declarar y declaramos que son las mismas conformes a Derecho, confirmándolas; no se hace imposición de costas.»

Asimismo, y en el recurso de casación número 3.563/1997, preparado ante el Tribunal Supremo por la representación procesal de los recurrentes, contra la anterior sentencia, ha sido dictado auto, en fecha 1 de septiembre de 1997, confirmado en súplica en 2 de febrero de 1998, declarando desierto el recurso de casación preparado y firme la sentencia recurrida.

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Costas.